

EN LOS 25 AÑOS DE LA CONSTITUCION

NO HAY LEGITIMIDAD

Este gobierno ha colmado las medidas antipopulares del gobierno anterior. Endeudarse para financiar la criminal salida de capitales que aborta toda posibilidad de desarrollo, subsidiar la deuda privada y avalarla y garantizar su reingreso en condiciones privilegiadas como capital extranjero, negarse a cualquier reforma tributaria que toque los patrimonios y las ganancias del gran capital, "incentivar" escandalosamente la inversión privada mediante constantes aumentos de precios que amplían groseramente la ya escandalosa tasa de ganancia, mantener en la total impunidad (fuera de algún chivo expiatorio) a corruptores y a corruptos tan públicamente señalados... y por otra parte cargar exclusivamente sobre el pueblo todo el costo de la crisis a pesar de las abultadas entradas al fisco por el manejo cambiario, avalar el hambre del pueblo al permitir escandalosas subidas de precios; incluso al provocarlas el propio Estado con aumentos descabellados como el de la gasolina, llevar la desmoralización a las familias al no utilizar las gruesas entradas por la manipulación cambiaria para un plan consistente de empleo productivo, humillar al país al exigir como requisito para obtener empleo el carnet del partido y aun la recomendación escrita de algún dirigente, atropellar sistemáticamente a los sectores populares con agresiones policiales continuas y claramente anticonstitucionales, permitir el deterioro brutal de los servicios públicos de salud, educación y otros, impedir sistemáticamente la organización vecinal mediante el asalto a las juntas de vecinos independientes y la imposición absoluta y vertical de juntas del partido y que sólo de él reciben instrucciones, negarse a la reforma judicial independizando la elección de los jueces de modo que dejan de ser un apéndice de los partidos, burlarse de la reforma del Estado, a pesar del consenso de todos los sectores representativos, por temor a perder su poder caudillesco.

Estos índices bastan para concluir que la administración del Estado venezolano por los partidos políticos carece hoy día de legitimidad. No es legítima la actual conducción de nuestros partidos porque ni son capaces ni están interesados en cumplir los fines de nuestra carta constitucional. Con estos partidos en el gobierno y en la oposición ni somos ni seremos una democracia social. Somos una democracia oligárquica. Y además, ineficaz. Y sobre todo, irreformable. No hay voluntad política para un cambio verdadero.

LOS CULPABLES

La culpa de los partidos recae en buena medida sobre nuestra burguesía, ante todo sobre los grupos integrados, sobre el gran capital. Ellos son los que sistemáticamente, mediante halagos, la práctica brutal de la desinversión y la compra directa han corrompido a los partidos. Es el triste destino de una burguesía que, renunciando a su papel histórico, es más diestra en obtener privilegios del Estado que en aumentar la productividad. Pero eso no exime de culpa a los partidos que se han dejado corromper por su negativa sistemática a movilizar y sobre todo a organizar al pueblo. Tenían que caer en manos de la burguesía quienes renunciaron a ser partidos del pueblo y se justificaron ante él por la entrega de servicios y no por el llamado a la participación. No se trataba de implantar una dictadura del proletariado sino unas reglas del juego fijas y claras que por su contenido social habrían obligado a la burguesía a dar lo mejor de sí: su inventiva económica, sentido del riesgo y capacidad gerencial. ¿Para qué explotar estas difíciles virtudes si había un modo más fácil de llegar a las riquezas? De este modo los gobiernos corrompidos han sido a su vez corruptores de la burguesía.

NO HAY SALIDA

¿Qué hacer ante esta situación? Tenemos que seguir luchando, tendremos que luchar más para paliar los efectos de esta gestión antihistórica. Pero, hoy por hoy, no hay ninguna salida. No la hay en los partidos desgastados, burocratizados, cogollizados, sin imaginación, enquistados en el poder. Menos la hay en una gestión directa de la burguesía, la mayor culpable del actual estado de cosas.

Sería ilusoria la salida militar. Primero, porque los militares están enredados en esta situación: forman parte, sí, de la democracia, pero como un estamento privilegiado; incluso algunos altos militares han sido acusados de corrupción. Segundo, porque, aunque poseyeran voluntad de saneamiento y gestión popular, está más que comprobado en América Latina, que, aun con la

mejor de las intenciones, los militares no constituyen un sujeto adecuado para la gestión gubernativa y acaban cayendo en los peores vicios de las democracias que pretendieron superar. Así pues nuestra afirmación de que no hay salida para el país en nuestra democracia gerenciada por los actuales partidos no sólo no predispone a una salida cívico-militar sino que positivamente la excluye. ¿Entonces? ¿Estamos propiciando el desencanto y la desmovilización? De ningún modo.

¿QUE HACER?

Proponemos, por el contrario, no rendirnos ante la situación. Proponemos ir a la raíz de nuestras vidas y de nuestro sistema, ir desde allí promover una acción profunda y sostenida en dos direcciones. La primera, no descuidar el hilo de los acontecimientos y tratar que no empeore demasiado la situación. Por eso aprobamos y apoyamos a la gente honesta e imaginativa que aún milita en los partidos. Porque los partidos son insustituibles.

Nadie debe ser excluido de ese sujeto histórico. Seguramente hay no pocos empresarios, sobre todo de la mediana y pequeña empresa, que anhelan un cambio de reglas de juego. También se reclutarán sus miembros entre la clase profesional. Los profesionales que entiendan su trabajo más como modo que como medio de vida, los profesionales vocacionales y con sentido de servicio, sólo tendrán que ganar en un cambio de situación. Pero la base del sujeto histórico que podrá superar radicalmente esta circunstancia la constituye nuestro pueblo. Se trata de que nuestro pueblo se articule, se capacite y tome conciencia.

RED DE ASOCIACIONES

La formación de este sujeto histórico no ha de ser hoy por hoy prevalentemente política sino civil. La fase actual es la de formar multitud de asociaciones con fines particulares y concretos. Sólo ahí, en el manejo directo y participado de asuntos que le interesan y le conciernen, podrá formarse un sujeto histórico que supere cualitativamente al actual.

Hay que evitar sin embargo un peligro: Transformar esos grupos, comunidades y asociaciones en corporaciones. Eso es lo que son hoy en nuestro país los partidos, FEDECAMARAS, la CTV, los gremios profesionales, las Fuerzas Armadas y la Institución Eclesiástica. Su finalidad real, más allá de las actividades concretas que desempeñan, es otorgar a sus asociados y sobre todo a sus cuadros dirigentes un estatuto privilegiado y defenderlo a como dé lugar. Esta corporativización de las grandes organizaciones nos ha convertido en un país feudal. Cada cuerpo ha conquistado una cuota de poder y su finalidad es salvaguardarlo e incrementarlo. El cumplimiento de sus fines específicos en servicio de la comunidad es un fin secundario que se realiza siempre que no toque los intereses propios. Estos macroorganismos viven siempre peleando entre ellos sus cuotas de poder, aunque de un modo global han pactado entre sí. Por eso ser ciudadano no es hoy en nuestro país ningún título y en realidad de verdad no da derecho a nada. El sujeto de la Constitución Nacional es el ciudadano. Por eso decimos que, como las organizaciones que nos gobiernan no son agrupaciones abiertas de ciudadanos sino corporaciones que viven para sí, estas organizaciones no están interesadas en cumplir la Constitución, no quieren cumplirla, tal como existen hoy son un obstáculo para que la Constitución se lleve a la práctica.

Por eso frente a estos macroorganismos proponemos agrupaciones horizontales, abiertas, participadas, abocadas a tareas concretas, comprensibles y proporcionadas a sus asociados, para que de este modo las puedan diseñar, realizar y controlar. Naturalmente que este modelo presupone un espíritu y ése no puede ser otro que el bien común que sólo se alcanza desde el bien del pueblo.

No debemos tener prisa. No podemos quemar etapas. No hay solución para nuestro país mientras el ciudadano se encuentre solo e inerme frente a las grandes corporaciones. Sería de desear que las corporaciones se abrieran a la sociedad civil y entraran en un flujo comunicacional horizontal y abierto. Hay indicios serios de que algo de eso está ocurriendo en sectores de la Institución Eclesiástica. No observamos algo semejante en las demás. Pero, sea como sea, la sociedad civil no puede estar esperando que las corporaciones se deciden a cambiar. Tiene que cambiar ella misma. Y tiene que cambiar ya. Percibimos que el proceso está en marcha. Esa es nuestra esperanza. Invitamos a nuestros lectores a sumarse a ella.

Obsequie una suscripción de

